

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante	José Ignacio Hernández Vélez.
Demandado	AFP Protección S.A. y Colpensiones.
Tipo de proceso	Ordinario
Radicado Nacional	05-001-31-05- 006-2018-00556-02
Instancia	Segunda
Providencia	Interlocutorio 54 de 2022
Tema y subtema	Apelación liquidación de agencias en derecho
Decisión	Confirma

Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados, Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la **AFP Protección S.A.**, contra el auto del 08 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **José Ignacio Hernández Vélez.**, código radicado número 05001 3105 **006 2018 00556 02**.

Antecedentes

Mediante proveído del 8 de julio de 2022, el juzgado de conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P., liquidó y aprobó las agencias en derecho en la suma de **\$3.500.000.00 a cargo de la codemandada Protección S.A**, en primera instancia; y **\$1.000.000.00** en esta sede a cargo del mismo fondo.

Inconforme con la anterior decisión, **la apoderada de la codemandada Protección S.A. formuló recurso de reposición y en subsidio apelación**, argumentando que se debía tener en cuenta que el proceso de la referencia, nulidad y/o ineficacia de la afiliación al RAIS era una obligación es de hacer; por lo cual, las costas fueron desproporcionadas al no existir cuantificación del valor de las pretensiones, pues no podía perderse de vista que la facultad del Juez no es irrestricta, debiendo orientarse de conformidad con lo normado en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de fecha agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispuesto en su artículo 2.

Añadió que, en virtud de lo anterior se debe tener en cuenta que la demanda fue admitida el 14 de diciembre de 2018 por el Juzgado 06 Laboral del Circuito de Medellín, el 09 de marzo de 2019 se fijó fecha de audiencia, llevada a cabo el 09 de julio de 2020, en la cual se profirió sentencia absolutoria y el 08 de febrero de 2022 el Tribunal Superior de Medellín la revocó indicando: *"Costas en esta instancia a cargo de las demandadas. Inclúyase en la liquidación respectiva la suma de \$1.000.000.00 por concepto de agencias en derecho a cargo de cada una de las accionadas"* en dicha instancia, es así como la duración del proceso y las circunstancias especiales directamente relacionadas con la actividad, junto con los actos desplegados por el apoderado de la parte actora fueron normales, la duración del trámite fue corta y en ningún momento se acreditó un gasto adicional.

Agregó que, además, el artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento del trabajo y de la seguridad social prevé que la liquidación de costas consulte las tarifas determinadas por el Consejo Superior de la Judicatura e igualmente que:

"... Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el

apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

Por lo cual, debe revocarse y/o modificarse el auto de fecha 08 de julio de 2022, por medio del cual se liquidaron las costas incluyendo como agencias de derecho la suma de \$ 4.500.000 a cargo de su representada, PROTECCION S.A.

Mediante proveído del 19 de julio del cursante año, el Juzgado de conocimiento, no repuso su decisión argumentando que la suma impuesta (3.5 smlmv para el año 2022) se ajustó a los criterios de ley, atendiendo al análisis puntual de las actuaciones surtidas en la instancia y dentro de los topes señalados en el acuerdo vigente para el caso, por lo que concedió el recurso de alzada, disponiendo el envío del expediente a esta Corporación.

Consideraciones

La inconformidad radica en la fijación de las agencias, pues la recurrente argumenta en síntesis que las mismas se tasaron por encima de los límites legales, sin atender lo establecido en el Acuerdo PSAA1610554 del 5 de agosto de 2016.

Sea lo primero señalar que ciertamente para dirimir el asunto, ha de atenderse a lo establecido en **el Acuerdo PSAA1610554 del 5 de agosto de 2016** de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual determina que el valor de las agencias en derecho para los procesos en primera instancia, cuando se formulen pretensiones de tipo pecuniario, será hasta un 10% de lo pedido; y **en asuntos que carezcan de cuantía entre 1 y 10 SMMLV.** y en segunda instancia, **entre 1 y 6 S.M.M.L.V.**

De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las agencias en derecho encuadran en lo establecido en el referido compendio o, en caso contrario, si deben ser reducidas.

Es menester precisar que la norma citada no puede estudiarse e interpretarse aisladamente, pues se observa que el Artículo 2° del referido Acuerdo hace alusión a los criterios en los cuales debe basarse el juzgador para tasar las agencias en derecho, al indicar:

Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Significa lo anterior, que el juzgador cuenta con diferentes pautas para determinar la suma correspondiente y que lo hace de una manera discrecional, pero dentro de los límites legales enunciados.

Debe advertirse que lo debatido en este trámite **corresponde a un asunto sin cuantía**, en la medida que se trata de un proceso declarativo, en el que se estableció la ineficacia de una afiliación, ordenándose como consecuencia a las demandadas obligaciones de hacer, lo que permite al juez imponer un monto de **hasta 10 salarios mínimos legales**, siendo tal valor equivalente para el caso a un máximo de **\$10.000.000.00** y en la instancia inicial se fijaron en **\$3.500.000.00**, monto que se encuentra dentro del tope señalado y que se compadece con la gestión desplegada por el apoderado del demandante, la duración del trámite, atención y diligencia al encargo, pues si bien el asunto no ofrece mayor complejidad, el vocero judicial ejerció su función desde el 11 de septiembre de 2018, durante casi 96 meses con diligencia, atendiendo los requerimientos del despacho y asistiendo a la audiencia programada, aunado a que tampoco puede

perderse de vista que el demandante se vio forzado a contratar los servicios del profesional del derecho para iniciar el proceso ordinario y lograr sus pedimentos, los cuales vale anotar fueron negados en primera instancia, debiendo incluso acudir en alzada para obtener su derecho, luego, **no es dable pauperizar los esfuerzos del actor para acceder a la administración de justicia, ni la labor del abogado,** y en esa medida, considera la Sala razonable el monto fijado, por lo que no hay lugar a modificación.

Frente a las agencias en derecho de **un** salario mínimo legal vigente para la época, impuestas en segundo grado a cargo de la codemandada Protección S.A. hoy apelante, se consideran igualmente razonables, por lo que no hay lugar a modificación, ello atendiendo a las mismas reflexiones de orden cualitativo ya expuestas, y a que conforme a **lo consagrado en la disposición antes transcrita en relación con el límite permitidos, las mismas se ajustan a tales parámetros y más aún, se fijó el valor mínimo autorizado, razón por la que no es procedente su modificación,** imponiéndose en consecuencia la **confirmación** de la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia, por no haberse causado. artículo 365 - 8 C.G. del P.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

Resuelve

Confirmar el auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, el 8 de julio del año 2022, dentro del proceso ordinario laboral

promovido por **José Ignacio Hernández Vélez** en contra de **la AFP Protección S.A. y otra.**

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 153 del 30 de agosto de 2022
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>